

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| DEMANDANTE        | : RICARDO PÉREZ GRANADOS   |
| DEMANDADO :       | : COLPENSIONES   |
| TIPO DE PROCESO   | : ORDINARIO  |
| RADICADO NACIONAL | : 05-001-31-05-022-2019-00412-01                                 |
| RADICADO INTERNO  | : 243-22   |
| DECISIÓN          | : REVOCA PARCIALMENTE, ABSUELVE, ADICIONA,<br>CONDENA Y CONFIRMA |
| ACTA NÚMERO       | : 288  |

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

El demandante solicita se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de vejez desde la fecha del cumplimiento de edad y semanas (62 años y 1.300 semanas), ello es, desde el 2 de junio de 2018, incluyendo las mesadas adicionales de los meses de junio y diciembre de cada año; al pago de los intereses moratorios. Igualmente solicita se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la reliquidación de la pensión de vejez, con base en los arts. 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 y como consecuencia de ello, se condene a reconocer y pagar la

reliquidación de la pensión de vejez, incrementando la tasa de reemplazo del 75.04% hasta el 80% del IBL, incrementándose la mesada pensional del demandante, desde el cumplimiento de los requisitos legales, que tuvo lugar el 2 de junio de 2018, incluyendo las mesadas adicionales; se condene al pago de la indexación de las sumas adeudadas, correspondientes a la reliquidación; y se condene a la demandada en costas procesales.

La parte accionante sustenta sus pretensiones, manifestando que el 5 de junio de 2018 solicitó pensión de vejez y por medio de la resolución 192.822 de 2018, Colpensiones reconoció la prestación económica, la cual fue reconocida con base en un IBL de \$8.527.896, al cual se le aplicó el 75,04% para una mesada inicial de \$6.399.333 a partir del 1º de agosto de 2018; la prestación económica fue reconocida a partir del 1º de agosto de 2018, a pesar que el demandante dejó de realizar cotizaciones al sistema de pensiones una vez acreditó los 62 años (último requisito), donde su última cotización fue el 31 de mayo de 2018. Al revisar la liquidación de la pensión de vejez, el demandante acredita un total de 2.211 semanas de cotización, donde la entidad demandada le aplicó una tasa de reemplazo del 75.04%, sin embargo, al realizar la liquidación con la nueva fórmula contenida en el sistema general de pensiones, arroja que la tasa de reemplazo que le debió aplicar al demandante, es de 80%.

El actor elevó solicitud de reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde la fecha del cumplimiento de los requisitos legales, intereses moratorios, reliquidación pensional teniendo en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, incrementando la tasa de reemplazo del 75% al 80%, el retroactivo de la reliquidación desde el 2 de junio de 2018 e indexación, sin que la entidad accionada diera respuesta.

### **RESPUESTA A LA DEMANDA**

Colpensiones en su contestación dijo que no es cierto que el demandante tenga derecho a la reliquidación de la pensión con una tasa de reemplazo del 80%. Aceptó la solicitud de la pensión de vejez elevada el 5 de junio de 2018; el reconocimiento de la prestación económica a partir del 1º de agosto de 2018;

y la solicitud elevada a Colpensiones. Se opuso a las pretensiones de la demanda (expediente digital 08).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 26 de enero de 2022, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que el derecho pensional por vejez reconocido por Colpensiones y el disfrute prestacional se dio al 2 de junio de 2018; que la primera mesada pensional del actor para el año 2018 es de \$6'822'317 y la del 2022 es de \$7'841.649; declaró que el actor tiene derecho a reajuste pensional por la vía de la tasa de reemplazo al 80% del IBL reconocido por Colpensiones.

CONDENÓ a Colpensiones a pagar al actor los siguientes valores por los siguientes conceptos:

- Por mesada pensional causada entre 2 de junio al 30 de junio de 2018, el valor de \$6'594.906
- Por mesada pensional de julio del año 2018, \$6'822.317.

Por diferencias entre las mesadas pensionales y las halladas judicialmente, Colpensiones es condenada a pagar al demandante:

- Por cada mesada pensional causada desde 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre del año 2018 un valor de \$422.984.
- Por cada mesada del año 2019, \$436.435.
- Por cada mesada del año 2020, \$453.019.
- Por cada mesada del año 2021, \$460.313.
- Por cada mesada del año 2022 que no sea paguen reajustadas, \$486.182.

Estas diferencias deberá pagarlas Colpensiones al actor, usando la fórmula:  $\text{Reajuste indexado} = (\text{IPC final} / \text{IPC inicial} * \text{reajuste nominal}) + \text{reajuste nominal}$ .

La mesada pensional para el año 2022 es de \$7'841.649. En adelante, este valor deberá ser actualizado año a año, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Condenó a Colpensiones a pagar al demandante los intereses de mora sobre las mesadas pensionales de junio y julio del año 2018 desde la causación y hasta el pago efectivo de la obligación; y condenó en costas a Colpensiones.

El presente asunto se conoce en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**La apoderada de Colpensiones** solicita que la entidad que representa sea absuelta de las pretensiones de la demanda, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante contaba con 38 años de edad y 19 años, 1 mes y 6 días efectivamente cotizados, siendo beneficiario del régimen de transición y cumple lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservarlo; el reconocimiento de la pensión de vejez se realizó con base en el Decreto 758 de 1990 y en numeral 1.6.2 de la Circular interna 01 de 2012 y conforme a ello, para el reconocimiento pensional debe contar el actor con 60 años de edad, el cual acreditó el 2 de junio de 2016, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, por lo que Colpensiones estudió el reconocimiento con los arts. 33, 34 y 21 de la Ley 100 de 1993 y el disfrute de la pensión con los arts. 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 y Circular Interna 01 de 2012.

A partir de lo anterior, se procedió a realizar la liquidación de la prestación reconocida, teniendo en cuenta un IBL de \$8,527,896 que al aplicarle la tasa de reemplazo del 75.04% generó una mesada de \$6,399,333, se tuvo en cuenta como fecha status, el 2 de junio de 2018 y fecha efectividad el 1º de agosto de 2018; el reconocimiento en mención se hizo teniendo en cuenta la Circular Interna 24 de 2018, en la cual se modificó el numeral 1.6.5 de la Circular interna No. 1 de 2012.

### **PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO**

El problema jurídico en esta instancia se centra en analizar en el grado jurisdiccional de consulta: i) Si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el 2 de junio de 2018 y a los intereses moratorios reconocidos en primera instancia; ii) Si tiene derecho a la

reliquidación de la pensión de vejez teniendo en cuenta una tasa de reemplazo superior a la reconocida por Colpensiones y la indexación de la condena.

En primera instancia, la A Quo condenó al retroactivo pensional desde el 2 de junio de 2018, porque si bien, no existe novedad de retiro, el demandante realizó actos que acreditan su interés de disfrutar la pensión, como lo fue dejar de cotizar y elevar la reclamación el 5 de junio de 2018. Y accedió al reajuste de la pensión con el 80% porque al tener en cuenta que el demandante acreditó 2.206 semanas según resolución que reconoció la prestación económica de vejez emitida por Colpensiones y 2.211 semanas según la historia laboral aportada, y al aplicar la formula consagrada en el art. 34 de la Ley 100 de 1993 arrojó una tasa de reemplazo del 82.08%, que al ser superior al 80% de la norma en mención, por lo que procede el reajuste de la prestación al 80%.

### **1. Del retroactivo pensional causado desde el 2 de junio de 2018**

Se encuentra probado en el plenario que el demandante nació el 2 de junio de 1956 (fl. 1 del expediente digital 03), lo que hace que los 62 años de edad fueran alcanzados el **2 de junio de 2018**; el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez el **5 de junio de 2018** y por medio de la resolución 192.822 de 2018, Colpensiones reconoció la prestación económica a partir del **1º de agosto de 2018** por no aparecer acreditada la desafiliación al sistema (fls. 3 a 14); según la historia laboral de fls 15 a 19, el demandante cotizó un total de 2.211,14 semanas y según se extrae de la resolución 192.822 de 2018, el actor cotizó un total de 2.206 semanas (fl. 9).

Visto lo anterior, nos debemos remitir al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el cual establece los requisitos para acceder a la pensión de vejez, sin olvidar las exigencias señaladas por los 13 y 35 ibídem en relación a la causación, disfrute y pago de la pensión, esto es, la desafiliación o retiro del servicio o del régimen.

Así mismo este tema nos remite al artículo 3º del Decreto 1406 de 1999, por medio del cual se determinan los procedimientos de autoliquidación de aportes, y la clasificación de novedades, que se hace a través del formulario

de autoliquidación o por medio magnético, y en donde se incluye la novedad de retiro.

Con la normatividad enunciada, dejamos claro que el derecho al disfrute de la mesada pensional se genera con la desafiliación del régimen general de pensiones, el cual se hace a través de la novedad registrada por el aportante, quien es, según el sistema de recaudación de aportes, la persona encargada de efectuar los pagos, y notificar las novedades al Sistema General de Seguridad Social, lo anterior se encuentra consagrado en el artículo 1° del Decreto 1406 de 1999.

Ahora, descendiendo al caso concreto, en lo que respecta a la causación y disfrute del derecho pensional, en el presente caso la causación se generó el **2 de junio de 2018**, fecha en que cumplió los 62 años de edad y ya contaba con creces con más de las 1300 semanas exigidas por el art. 33 de la Ley 100 de 1993, pues en la historia laboral se refleja un total de 2.211 semanas cotizadas; y en virtud de lo establecido en el inciso 2° del art. 4° de la Ley 797 de 2003 que reza: *“La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.”*, se evidencia que la última cotización realizada por el empleador SKF LATIN TRADE SAS al actor, tuvo lugar para el **31 de mayo de 2018** (fl. 19), y aunado a lo anterior, el Sr. Ricardo Pérez Granados solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el **5 de junio de 2018** (fl. 3), entendiendo con su actuar, que si bien, no existió novedad de retiro conforme lo exige la ley, el demandante desplegó actos de los cuales se extrae el retiro tácito y su interés de disfrutar la prestación económica de vejez con el cumplimiento del último de los requisitos, que fue el cumplimiento de la edad el 2 de junio de 2018.

Al respecto, la sentencia SL 5603 de 2016 indicó:

*“Ahora bien, en lo relacionado concretamente con la interpretación a la que se adscribió el ad quem y que denominó «teoría de la desafiliación tácita del sistema», cumple agregar que su denominación no es la más afortunada, pues más que un acto tácito de desafiliación, corresponde a la verificación de la voluntad del afiliado de no seguir vinculado con el régimen de pensiones. Sin embargo, esta imprecisión terminológica o de acento, no le resta contenido sustancial a los argumentos del Tribunal en virtud de los cuales, dedujo que la intención del actor de no*

seguir afiliado al sistema es constatable desde el momento en que dejó de cotizar y solicitó el pago de la prestación o de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

El anterior razonamiento a juicio de esta Sala, tiene cabida en el marco de lo previsto en los arts. 13 y 35 del A. 049/1990, pues estas disposiciones admiten un entendimiento conforme al cual la voluntad del afiliado de no continuar afiliado al sistema, manifestada mediante actos externos, es un parámetro válido para establecer la fecha de inicio de disfrute de la pensión.

En efecto, si el objetivo de las mencionadas disposiciones es adquirir certeza del momento a partir del cual el afiliado no desea seguir en el sistema, dicha situación puede ser igualmente cognoscible mediante otros actos exteriores e inequívocos, como lo puede ser la suspensión definitiva de los aportes o la manifestación expuesta en tal sentido.

En este asunto, concurrieron dos factores que al Tribunal le permitieron adquirir certeza de la intención del demandante de no seguir vinculado al sistema de pensiones: por una parte, **la cesación definitiva de sus aportes a partir del ciclo de junio de 2008 y, por otra, su solicitud de pago de la pensión o de la indemnización sustitutiva. (...)**

Con fundamento en lo anterior, se CONFIRMARÁ el reconocimiento del retroactivo pensional desde el 2 de junio al 31 de julio de 2018, debiéndose ADICIONAR la sentencia, en el sentido de CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de **\$12.350.713** por concepto de retroactivo pensional causado del 2 de junio al 31 de julio de 2018, teniendo como sustento el siguiente cálculo:

| REAJUSTE PENSIONAL |       |                  |              |                    |           |                   |
|--------------------|-------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Año                | IPC   | Valor reconocido | Valor real   | Diferencia mensual | # mesadas | Total retroactivo |
| 2018               | 3,18% | \$ 0             | \$ 6.399.333 | \$ 6.399.333       | 1,93      | \$ 12.350.713     |
| 2019               | 3,80% | \$ 0             | \$ 6.602.832 | \$ 6.602.832       |           | \$ 0              |
| 2020               | 1,61% | \$ 0             | \$ 6.853.739 | \$ 6.853.739       |           | \$ 0              |
| 2021               | 5,62% | \$ 0             | \$ 6.964.085 | \$ 6.964.085       |           | \$ 0              |
| 2022               |       | \$ 0             | \$ 7.355.466 | \$ 7.355.466       |           | \$ 0              |
| TOTAL              |       |                  |              |                    |           | \$ 12.350.713     |

2. Frente a los intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, determinar que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, hay lugar al reconocimiento de este concepto, ya que en este caso se observa que el demandante cumplió los requisitos mínimos pensionales el 2 de junio de 2018, la última cotización a

pensiones la realizó en el mes de mayo de 2018, y el demandante elevó reclamación a Colpensiones el 5 de junio de 2018, lo que genera que se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios a partir de los cuatro meses siguientes a la reclamación del retroactivo pensional, a la luz de lo consagrado en el art. 9º de la Ley 797 de 2003.

En este sentido, como la reclamación del retroactivo pensional tuvo lugar el 29 de marzo de 2019 según se extrae de la reclamación de fl. 32 del expediente digital 03, se MODIFICAR la sentencia recurrida y en su lugar se CONDENARÁ a Colpensiones al pago de los intereses moratorios sobre el valor del retroactivo pensional a partir del **29 de julio de 2019** y hasta el pago efectivo de la obligación.

### **3. En relación a la reliquidación de la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 80%**

Se encuentra acreditado que Colpensiones reconoció la pensión de vejez por medio de la Resolución 192.822 del 19 de julio de 2018 con base en un total de 2.206 semanas, un IBL de \$8.527.896 que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75,04% generó una mesada pensional de \$6.399.333 para el año 2018 (fls 3 a 14 del expediente digital 03).

Visto lo anterior, para determinar el monto de la pensión de vejez, el art. 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 10 de la L 797 de 2003 señala:

*“A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:*

*El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:*

*$r = 65.50 - 0.50 s$ , donde:*

*$r$  = porcentaje del ingreso de liquidación.*

*$s$  = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.”*

Para dar aplicación a la formula consagrada en el artículo en mención, tendremos en cuenta para determinar “s”, que:

- El IBL de \$8.527.896 reconocido por Colpensiones en la Resolución 192.822 de 2018,



- El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2018 era de \$781.242.
- Por lo tanto, “s”, son las veces que el salario mínimo caben en el IBL:  
\$8.527.896 / \$781.242: **10.915818658**.

Ahora, despejando la formula tenemos que:

$$R=65.50 - 0.50 s$$

$$R=65.50-(0.50*10.915818658)$$

$$R=65.50 - 5.457909329= \mathbf{60.04\%}$$

Teniendo en cuenta que R= 60.04%, la norma da la posibilidad de incrementarse ese porcentaje, teniendo que, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, se suma el 1.5%. La norma contempla lo siguiente:

*“... A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje **que oscilará entre el 65 y el 55%** del ingreso base de liquidación de los afiliados, **en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada**. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.*

*A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, **llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5%** de dicho ingreso, **en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización**, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”*

Así las cosas, en este evento, para el año 2018 como fecha de causación y disfrute de la pensión, las semanas mínimas requeridas eran 1300 y el demandante cotizó un total de 2.206 según la resolución 192.822 de 2018 o 2.211 semanas según la historia laboral que reposa en el plenario, lo que equivalen a **906 o 911 semanas adicionales**. Entonces, si dividimos las 906 o 911 semanas adicionales entre las 50 semanas, dan un total de 18.12 o 18.22, que multiplicadas por 1.5% da **27.18% o 27.33%**.

En este sentido, **en principio** se podría decir que la tasa de reemplazo sería de 60.04%+27.18%=**87.22%** o 60.04%+27.33%=**87.37%**, monto superior al 80% máximo establecido en el art. 34 de la Ley 100 de 1993. **Sin embargo**, la

teleología del art. 34 de la Ley 100 de 1993, se debe tomar a la luz de los principios que guiaron los motivos expuestos al proyecto que posteriormente fue la Ley 797 de 2003, los que pregonaron que para efectos de hacer viable financieramente el sistema pensional, se debían establecer reglas que permitan hacer provisiones financieras dirigidas a la sostenibilidad del sistema; y garantizar la liquidez del mismo, por ello con base en el principio de universalidad y solidaridad, las personas que tuviesen un IBL equivalente al salario mínimo legal mensual, su monto sería del 80% y que las personas que tuvieran un salario máximo de cotización permitida su monto sería hasta el 70.5%, argumentos que se acompañan con las sentencias de la Corte Constitucional en las sentencias C-228 de 2001 y C-083 de 2019, en donde la última de las sentencias en mención, al analizar el inciso final del art. 10 de la L 797 de 2003, declaró exequible el inciso analizado señalando:

*“(…) Al analizar los cargos presentados la Sala Plena refiere que la disposición demandada concreta el principio de solidaridad en el sistema pensional, dado que otorga un equilibrio al sistema que lo hace sostenible, en tanto las 50 semanas adicionales para aumentar el monto, incentivan la permanencia en la cotización, que coadyuva a ingresar recursos en el régimen de prima media con prestación definida.*

*Asimismo, se sostiene que la disposición no afecta el reconocimiento de la pensión, por el contrario, incentiva que el valor se aumente, sin que ello comprometa su existencia. ... Entonces, al prescribir el inciso final del artículo 10 de la Ley 797 de 2003 que el aumento porcentual es de 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas puede afirmarse que se ha mantenido la fórmula, en lo que a ese aspecto atañe.*

***Por último la Sala encuentra que el legislador no afectó ningún derecho fundamental y que, por el contrario, utiliza ese mecanismo, en atención a su amplio margen de configuración, para hacer viable el régimen de prima media, permitiendo su estabilidad y de ese modo efectivizar la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, su ampliación progresiva a sectores menos favorecidos, que tienen limitación en mantener cotizaciones constantes y por ende que son susceptibles de quedar desprovistos de protección durante la vejez. Es decir, a la par que asegura la sostenibilidad financiera del sistema, promueve los principios de universalidad y solidaridad, sin vulnerar el contenido del artículo 48 constitucional. De allí que el inciso final del artículo 10 de la Ley 797 de 2003 se declare exequible por el cargo analizado.”***

En igual sentido la sentencia C 078 de 2017 refiriéndose al artículo 18 que trata de la base de cotización al sistema, en el inciso tercero que reza “El límite

de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado...”, se revisan las siguientes sentencias C 155 de 1995, C 089 de 1997, C 789 de 2002, C 967 de 2003, C 1032 de 2006, la C 066 de 2016 y la C 1054 de 2004, en donde concluye en todas, que en materia de seguridad social en pensiones el legislador tiene libertad configurativa, verbigracia en esta última sentencia revisó la constitucionalidad del inciso 4° de la Ley 797 de 2003, que estableció un límite en el IBC de 25 SMLMV y a través del test de proporcionalidad en “juicio intermedio”, la corte concluyó que el tope impuesto a las pensiones introducía un factor de equidad de cara al límite del IBC. sostuvo que:

*“en los sistemas de seguridad social no se presenta una relación contractual sinalagmática o estrictamente conmutativa entre lo que aporta el contribuyente al sistema y lo que posteriormente recibe<sup>1</sup>, (...) De todo lo anterior puede concluirse que las limitaciones al derecho a la igualdad y al principio de solidaridad introducidas por la norma acusada son proporcionales y entran en el ámbito de la libre configuración legislativa del Congreso de la República, por lo cual no desconocen la Constitución”...el congreso en este sentido cumple con una finalidad constitucional ...asegurar la sostenibilidad financiera del sistema pensional. De otra parte, la medida es adecuada respecto del fin ya que el establecer un límite en el IBC genera necesariamente uno para el monto de las pensiones más altas, lo cual contribuye efectivamente a la sostenibilidad financiera. Es decir, la medida logra cumplir con el fin.*

*Para la Sala la medida es conducente ya que si bien es cierto no es la única forma de lograr la sostenibilidad financiera, **también lo es que la fórmula adoptada permite asegurarla, al establecer límites a las pensiones más altas para no generar un gasto desproporcionado para el erario, lo cual no es más que el cumplimiento de los mandatos superiores.***

*Como lo determinó esta Corte en la sentencia C-1054 de 2004, **la medida busca evitar que se acentúen inequidades en el sistema y su sostenibilidad financiera, ya que intenta redireccionar la mayor cantidad posible de subsidios a la mayor cantidad de la población que haya accedido a pensiones de menor cuantía y busca evitar un aumento desmesurado en el gasto para atender el pasivo pensional.** Por lo tanto, el establecer un límite en el IBC que no permite acceder al tope que fija la norma constitucional persigue un fin importante ya que busca la sostenibilidad financiera.*

Con base en lo anterior, para la Sala no existiría entonces un tema de aplicación del principio “in dubio pro operario”, por no existir 2 posibles interpretaciones de dicho inciso normativo, pues la norma en una correcta aplicación hermenéutica debe entenderse que el legislador impuso unos topes

---

<sup>1</sup> Cf. Sentencia C-655 de 2003.

mínimos y máximos de acuerdo a “**la forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización**”, por ello la norma se analice a la luz de los principios constitucionales de eficacia para que el sistema no tenga inequidades y sea sostenible, redireccionando el mayor número posible de subsidios, para que con base en los principios de universalidad y solidaridad, los que menos aportaron en términos de dineros, reciban un máximo de subsidio del estado y los que más aportaron, sea subsidiados en menor proporción por cuanto sus pensiones son suficientes para vivir dignamente. Así las cosas, la interpretación que se le debe dar a los extremos mínimos y máximos que contempla el art. 34 de la Ley 100 de 1993 sería:

- En los eventos en que los afiliados obtengan un IBL mayor, al reemplazar la formula del art. 34 de la Ley 100 de 1993, se generará una tasa de reemplazo cercana al 55%, y en este sentido el porcentaje máximo a aplicar ascendería al 70.54% y no al 80%, como lo pretende el actor.
- Y en los eventos en que los afiliados obtengan un IBL menor, al reemplazar la formula del art. 34 de la Ley 100 de 1993, se generará una tasa de reemplazo cercana al 65%, y en este sentido el porcentaje máximo a aplicar ascendería al 80%.

Conforme el aforismo jurídico, “donde el legislador es claro, no puede el intérprete señalarle un sentido distinto” estos dos eventos se presentan de esa manera, en tanto que la norma en mención fue clara en señalar “**en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada**”.

Y en sentencia SL 3207-2020, se determinó:

*“En dicha dirección, el derecho pensional que le acude se causa de conformidad a los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, que exigen 62 años de edad para los hombres y 1300 semanas de cotización, con una tasa de reemplazo que oscilará entre el 65 % y el 55 % del IBL, la cual será incrementada en 1.5 % por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, «llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5 % de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización» como lo indica el inciso final del artículo 10º de la Ley 797 de 2003.*

*Por lo cual, es necesario aclarar que para efectos del cálculo de la primera mesada pensional no se accederá a la tasa de reemplazo reconocida por la primera instancia, en razón a que el Juez no tuvo en cuenta que la fórmula decreciente expuesta en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 no solamente aplica para efectos de la base porcentual inicial, sino también para el cómputo del incremento adicional para llegar al tope máximo pensional, que oscilará entre el 80 y el 70.5 % a partir de un máximo de 500 semanas después de las 1300 mínimas requeridas y no de manera abierta hasta agotar las que reporte el afiliado, pues ello rompería el equilibrio matemático en el que fue concebida la ley en comento.”*

Así las cosas, ésta la Sala es de la posición que cuando se superen las 500 semanas adicionales a las 1300, es decir, cuando los afiliados coticen más de 1.800 semanas, el tope de semanas adicionales que se pueden adoptar **no puede superar el 15%**, valor que se extrae de la diferencia que existen entre los montos que trae el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, ello es, diferencia entre del 65% al 80%. Por lo tanto, como en la resolución que reconoció la pensión de vejez y en la historia laboral se extrae que la parte demandante contaba con un total de 2.206 o 2.211 semanas (fls. 9 y 19 del expediente digital 03), y como el IBL del hoy demandante (liquidado por Colpensiones) es de \$8.527.896, conllevó que al reemplazarse la formula se obtuviera un monto del 60.04% que al sumarle el 15%, genera que su **tope máximo de monto pensional ascienda al 75.04%**.

Siendo así las cosas, al aplicar al IBL de \$8.527.896 (liquidado por Colpensiones) el monto del 75.04% conlleva al reconocimiento de una mesada pensional para el año 2018 de **\$6.399.333**, suma idéntica a la reconocida por Colpensiones en la Resolución 192.822 del 19 de julio de 2018, lo que da lugar a REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia para en su lugar, ABSOLVER a Colpensiones del reconocimiento y pago del reajuste pensional aplicando una la tasa de reemplazo del 80%, y en consecuencia se ABSUELVE del pago de la indexación de este concepto.

Sin costas en esta instancia, por ser conocido en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** el reconocimiento del retroactivo pensional desde el 2 de junio al 31 de julio de 2018, debiéndose **ADICIONAR** la sentencia, en el sentido de **CONDENAR** a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de **\$12.350.713** por concepto de retroactivo pensional causado del 2 de junio al 31 de julio de 2018, teniendo como sustento el siguiente cálculo:

| REAJUSTE PENSIONAL |       |                  |              |                    |           |                   |
|--------------------|-------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Año                | IPC   | Valor reconocido | Valor real   | Diferencia mensual | # mesadas | Total retroactivo |
| 2018               | 3,18% | \$ 0             | \$ 6.399.333 | \$ 6.399.333       | 1,93      | \$ 12.350.713     |
| 2019               | 3,80% | \$ 0             | \$ 6.602.832 | \$ 6.602.832       |           | \$ 0              |
| 2020               | 1,61% | \$ 0             | \$ 6.853.739 | \$ 6.853.739       |           | \$ 0              |
| 2021               | 5,62% | \$ 0             | \$ 6.964.085 | \$ 6.964.085       |           | \$ 0              |
| 2022               |       | \$ 0             | \$ 7.355.466 | \$ 7.355.466       |           | \$ 0              |
| TOTAL              |       |                  |              |                    |           | \$ 12.350.713     |

**SEGUNDO: MODIFICAR** la sentencia recurrida y en su lugar se **CONDENAR** a Colpensiones al pago de los intereses moratorios sobre el valor del retroactivo pensional a partir del **29 de julio de 2019** y hasta el pago efectivo de la obligación.

**TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE** la sentencia de primera instancia para en su lugar, **ABSOLVER** a Colpensiones del reconocimiento y pago del reajuste pensional aplicando una la tasa de reemplazo del 80%, y en consecuencia, **ABSOLVER** del pago de la indexación de este concepto.

**CUARTO: CONFIRMAR** en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo explicado en la parte motiva de la providencia.

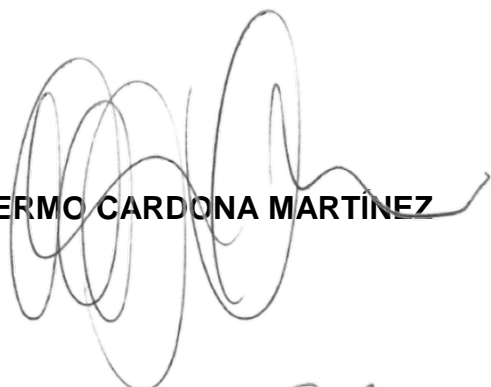
**QUINTO:** Sin costas en esta instancia, por ser conocido en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

**SEXTO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTANO CARDONA**



## **SECRETARÍA SALA LABORAL**

### **EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

|                   |  |
|-------------------|--|
| DEMANDANTES       | : JOSÉ ISRAEL PEREA COPETE               |
| DEMANDADOS        | : GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA             |
| TIPO DE PROCESO   | : ORDINARIO                              |
| RADICADO NACIONAL | : 05-001-31-05-019-2021-00142-01         |
| RADICADO INTERNO  | : 104-22                                 |
| DECISIÓN          | : REVOCA PARCIALMENTE, CONDENA, ORDENA Y |
| CONFIRMA          |  |

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

#### **CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 28 de octubre de 2022 a las 8:00am

#### **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 28 de octubre de 2022 a la 5:00pm



**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO



